

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/222  
19 de noviembre de 2002

(02-6444)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre  
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

## COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS

Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comunidad Europea y sus Estados miembros la siguiente comunicación, de fecha 19 de noviembre de 2002, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.

### Principios fundamentales

#### **Introducción**

1. En el párrafo 25 del Programa de Doha para el Desarrollo los Ministros mencionaron explícitamente los principios fundamentales de transparencia, no discriminación y equidad procesal como cuestiones que había que aclarar en el Grupo de Trabajo. La presente comunicación se centrará en los objetivos perseguidos por estos principios fundamentales y en cómo se podría definir claramente su alcance. No obstante, antes de hacerlo parece útil recordar algunas consideraciones generales acerca de dónde podrían encajar estos principios fundamentales en un acuerdo sobre la competencia. La CE ha sostenido constantemente en comunicaciones escritas e intervenciones orales anteriores en las reuniones del Grupo de Trabajo que un acuerdo marco de la OMC sobre la competencia no aspira ni debe aspirar a ofrecer una "solución" a todos los problemas que puedan surgir de la interrelación cada vez mayor del comercio internacional y las políticas de competencia. No obstante, lo que puede y debe hacer un acuerdo de esa índole es establecer una base sólida para hacer frente a las cuestiones fundamentales de la política de competencia que repercuten en el comercio internacional y facilitar la cooperación multilateral sobre esas cuestiones.<sup>1</sup> Una vez en vigor ese acuerdo marco, el establecimiento de un Comité de Política de Competencia de la OMC proporcionaría un foro adecuado para examinar si se puede promover mayor convergencia sobre otras cuestiones de política de competencia que tienen importancia para el actual sistema multilateral de comercio.

2. Como también ha sostenido constantemente la CE, el acuerdo marco *no* exigiría la armonización de las legislaciones nacionales en materia de competencia. El marco propuesto sería plenamente compatible con las diferencias actuales y futuras de los regímenes nacionales de competencia.

3. No obstante, conviene señalar que la diversidad de legislaciones nacionales sobre la competencia, aunque importante, es un aspecto que no se debe exagerar. Hay coincidencia sobre algunos de los elementos clave de la legislación y la política de competencia. Si se analizan los

---

<sup>1</sup> El posible alcance y concepción de esas modalidades de cooperación, también en lo que se refiere a los cárteles intrínsecamente nocivos, se ha examinado en las comunicaciones anteriores de la CE y sus Estados miembros, documentos WT/WGTCP/W/184 y 193.

casi 100 regímenes jurídicos vigentes sobre la competencia se puede observar un elevado grado de convergencia respecto a las siguientes características principales de la legislación y la política de competencia, pese a diferencias sobre disposiciones sustantivas y estructuras institucionales:

- la necesidad de considerar los cárteles intrínsecamente nocivos como la infracción más grave de la legislación interna sobre la competencia;
- la importancia, a pesar de diferencias en las estructuras institucionales, de los principios fundamentales de no discriminación, transparencia y equidad procesal;
- la necesidad de definir restringidamente las exclusiones y exenciones sectoriales de una manera transparente y previsible<sup>2</sup>;
- la importante función de las autoridades encargadas de la competencia en la defensa de la competencia;
- los principios básicos de jurisdicción nacional en relación con las prácticas anticompetitivas que tienen dimensión internacional; y
- la importancia de la cooperación internacional y los principios fundamentales que deben orientar esa cooperación.

4. La CE sigue firmemente convencida de que estos elementos constituyen una base sólida sobre la que se puede negociar con éxito un acuerdo marco multilateral en beneficio de todos los Miembros de la OMC, y de que con la concertación de dicho acuerdo se podría lograr un grado de convergencia aún mayor.

#### **1. Principios fundamentales: observaciones generales**

5. La primera consecuencia que se deriva de la elección de que un acuerdo de la OMC sobre la competencia *no* conlleve la armonización de las leyes nacionales sobre la competencia y pueda tener en cuenta las diferencias de los sistemas jurídicos nacionales, así como de las capacidades institucionales, es la necesidad de definir principios fundamentales de una manera inequívoca, pero sin intentar describir de manera detallada cómo funcionarían.<sup>3</sup> Además, esos principios fundamentales se pueden definir de tal manera que su aplicación tenga en cuenta la necesidad de progresividad y flexibilidad para los países en desarrollo, y especialmente para los menos adelantados de ellos.

6. La afirmación de principios fundamentales como la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal como compromisos de la OMC serviría para reforzar y asegurar más su importancia en el sistema jurídico nacional y establecería así una base más sólida para la confianza mutua y una mayor cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia, inclusive mediante acuerdos de cooperación bilaterales. Además, en el caso de los Miembros de la OMC que todavía tienen que adoptar leyes nacionales sobre competencia, un acuerdo de la OMC ofrecería una importante orientación para la redacción de esas leyes. Por último, un acuerdo de la OMC contribuiría a que los

---

<sup>2</sup> No obstante, se sobreentiende que en determinadas circunstancias, debido a la aplicación de la regla de la razón u otras consideraciones similares de las normas nacionales, también se pueden introducir con carácter *ad hoc* exenciones de estas normas mediante una decisión administrativa o un fallo judicial.

<sup>3</sup> Por lo tanto, cualquier referencia que se haga en esta comunicación a la manera en que se aplican estos principios en la legislación y la política de competencia de la CE debe considerarse como meramente ilustrativa.

Miembros se atuvieran a esos principios, haciendo sus regímenes jurídicos transparentes y previsibles y limitando al mismo tiempo la posibilidad de recurrir posteriormente al trato discriminatorio formal.

## 2. Flexibilidad y progresividad

7. La propuesta de la CE relativa a un acuerdo de la OMC sobre la competencia se basa en la premisa básica de que, en algún momento, todos los Miembros de la OMC tendrán en vigor leyes nacionales sobre la competencia y autoridades nacionales encargadas de su observancia. No obstante, como también se ha subrayado, la progresividad y la flexibilidad serían principios orientadores y delimitadores en lo que respecta a esta premisa básica.

8. Más concretamente, los conceptos de flexibilidad y progresividad podrían significar que:

- No es necesario aspirar a una definición más detallada del alcance sustantivo de las leyes nacionales sobre la competencia. Sería suficiente prever que dichas leyes estén firmemente basadas en los principios fundamentales (e incluirían la prohibición de los cárteles intrínsecamente nocivos). Probablemente algunos Miembros de la OMC (como ya ocurre en varias jurisdicciones) quisieran también incluir otras cuestiones sustantivas en sus leyes nacionales sobre la competencia, como el abuso de una posición dominante, la monopolización y el control de las fusiones. Sin embargo, un acuerdo de la OMC no debería entrañar la obligación de que las leyes nacionales sobre la competencia incluyeran esas disposiciones sustantivas.
- En cuanto a los países menos adelantados y determinadas economías más pequeñas, la falta de un régimen jurídico interno en materia de competencia frecuentemente se deberá a limitaciones de capacidad. Por lo tanto, cualquier compromiso de la OMC de adoptar legislación interna en materia de competencia y establecer autoridades encargadas del cumplimiento tendrá que ser flexible y progresivo; por ejemplo, no es razonable esperar que algunos Miembros de la OMC establezcan leyes y autoridades encargadas del cumplimiento a partir del momento en que se concierte el acuerdo de la OMC o en un breve plazo posterior. Además, hay que definir ese compromiso de manera flexible para que las distintas economías puedan establecer los sistemas administrativos que mejor se adapten a sus circunstancias particulares. Es evidente que las actividades de asistencia técnica y creación de capacidad que se han examinado en reuniones anteriores del Grupo de Trabajo y en numerosas comunicaciones escritas tendrían que desempeñar una función esencial en este sentido.
- Aún más pertinente, en aquellos casos en que se haya establecido un régimen jurídico de competencia en el plano *regional*, todas o algunas de las partes en esos acuerdos regionales -sobre todo los países y economías pequeños- pueden considerar que no es necesario elaborar otro régimen *nacional* de competencia (o determinadas partes, como el examen de las fusiones) y que el régimen regional basta para hacer cumplir eficazmente la legislación sobre la competencia en toda la región.
- Teniendo en cuenta las diferencias de las culturas y sistemas jurídicos no sería adecuado aspirar a definir de manera más detallada las facultades de las autoridades encargadas de la observancia. Como en otros Acuerdos de la OMC, bastaría con incluir referencias más generales a facultades de investigación y sanciones adecuadas, capaces de detectar y disuadir eficazmente la conducta anticompetitiva.

- Aunque la cuestión de las exclusiones y exenciones sectoriales de la aplicación de la legislación sobre la competencia no se limita a los países en desarrollo, tiene importancia especial para muchos de ellos. Un criterio flexible respecto a esta cuestión sería dejar libertad al régimen jurídico interno para definir el alcance y las modalidades de esas exclusiones y exenciones, a condición de que se haga de manera transparente y previsible.

9. En resumen, lo que importa es que se aplique a cada Miembro de la OMC un régimen eficaz en materia de competencia (que incluya normas adecuadas y la posibilidad de hacerlas cumplir) y que dicho régimen esté orientado a las necesidades y a la capacidad específicas del Miembro de la OMC de que se trate. Lo que resulta decisivo no es necesariamente que esas leyes y autoridades sean nacionales, sino más bien que tengan un carácter que permita a todos los Miembros de la OMC combatir las prácticas internacionales anticompetitivas y que existan autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que puedan ser interlocutoras en una cooperación internacional auténtica y satisfactoria.

### **3. Principios fundamentales en concreto**

10. Los principios fundamentales que se examinan a continuación son indudablemente los más importantes para el previsto marco multilateral de la OMC sobre comercio y competencia. Están firmemente incorporados en el sistema de la OMC y también son de importancia decisiva para los regímenes nacionales sobre la competencia. Los tres han sido mencionados explícitamente en el párrafo 25 del Programa de Doha para el Desarrollo. No obstante, la utilización de la palabra "incluidas" en el párrafo 25 da a entender que puede haber otros principios fundamentales que pueden tener un lugar y una función en un acuerdo de la OMC sobre comercio y competencia. De las deliberaciones del Grupo de Trabajo y en las futuras negociaciones podrían surgir nuevos principios fundamentales si los Miembros de la OMC consideran necesario dotar al previsto marco multilateral de principios derivados de su experiencia en política de competencia y que sean adecuados para las necesidades de dicha política.

### **4. No discriminación**

11. Casi no es necesario recalcar la importancia que tiene la no discriminación -el trato NMF y el trato nacional- para el sistema multilateral de comercio y la legislación nacional sobre la competencia. Es difícil imaginar una situación en la que un régimen jurídico de competencia establezca una distinción por motivos de la nacionalidad de las empresas, y hasta el momento las deliberaciones mantenidas en el Grupo de Trabajo no han mostrado tales ejemplos. También consideramos que en la mayoría de las legislaciones nacionales vigentes en materia de competencia -y puede que en ninguna- no se prescribe la discriminación contra las empresas por motivos de nacionalidad. Aunque sigue habiendo importantes diferencias sustantivas entre las distintas legislaciones nacionales sobre competencia, tanto la transparencia como la no discriminación surgen como importantes elementos de coincidencia en estas legislaciones.

12. Al sugerir la inclusión de disposiciones sobre no discriminación en un acuerdo marco de la OMC sobre la competencia, pensamos en una obligación en virtud de la cual las leyes nacionales sobre competencia deben fundarse firmemente en el principio de no discriminación en lo que respecta a la nacionalidad de las empresas. Dicho de otra manera, el tema en cuestión sería el *tratamiento concedido a las empresas de conformidad con las condiciones de la legislación interna en materia de competencia* propiamente dicha, y no el tratamiento concedido a las empresas en virtud de otra serie de políticas. Esta distinción importante, y con ella la limitación igualmente importante y necesaria sobre el alcance y las consecuencias de la no discriminación, se analizan más detenidamente *infra*.

13. En cuanto a cómo debería redactarse ese principio, aunque genéricamente hablando el objetivo general de la "no discriminación" será el mismo con arreglo a los diversos Acuerdos de la OMC, es decir, asegurar la igualdad de condiciones entre los operadores nacionales y los extranjeros (y sus bienes y servicios), o sea, el trato nacional, así como entre todos los operadores extranjeros, es decir, el trato de nación más favorecida, la manifestación del trato discriminatorio adopta formas muy diversas, como la utilización discriminatoria de la tributación interna y otras medidas previstas en el GATT, véase el artículo III del GATT. Por consiguiente, es evidente que hay que incluir el principio de no discriminación en un acuerdo marco de la OMC sobre la competencia mediante una disposición específica e independiente que tenga en cuenta las particularidades de la legislación y la política de competencia.<sup>4</sup>

## 5. Discriminación *de jure* frente a discriminación *de facto*

14. No obstante, es importante hacer hincapié en que *sólo* estamos sugiriendo un principio fundamental vinculante en lo que se refiere a la discriminación *de jure* en el marco jurídico nacional sobre la competencia, es decir, el trato que se otorga a las empresas con arreglo al texto de las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general. La razón principal para limitar las disposiciones de la OMC a la discriminación *de jure* es que, cuando se traslada al contexto de la competencia, el concepto de discriminación *de facto* puede plantear dudas complejas sobre las políticas en materia de observancia, prioridades y facultades procesales de las autoridades encargadas de la competencia, inclusive cómo se aplica la legislación sobre competencia a casos concretos.

15. Además, proponemos definir la discriminación *de jure exclusivamente* en relación con el régimen jurídico interno sobre la competencia. No proponemos que un acuerdo sobre la competencia deba intentar introducir una norma absoluta de trato nacional que haya de aplicarse a *cualquier forma* de ley o reglamento estatal. En cuanto a los objetivos de política industrial, social, de desarrollo o de otro tipo perseguidos por los Miembros de la OMC, *a priori* no hay motivo para considerar que la aplicación no discriminatoria de la política de competencia esté en contradicción con esas políticas legítimas. De hecho, las deliberaciones en el Grupo de Trabajo han mostrado que existe complementariedad básica y no conflicto entre las políticas de competencia, industrial y de desarrollo. Además, como se examina seguidamente, el marco de compromisos flexible propuesto seguiría dejando amplio margen para mantener políticas que limiten la aplicación de regímenes jurídicos internos sobre la competencia. Asimismo, hay que tener presente que los instrumentos que se utilizan normalmente para promover objetivos de política industrial y de otro tipo -sobre todo determinadas formas de subvenciones y protección temporal en frontera- figuran en otras disciplinas de la OMC y no resultarían afectados por un acuerdo de la OMC sobre la competencia.

16. Por último, la expresión "principio fundamental vinculante" indica implícitamente que el cumplimiento de estos principios está sujeto a la solución de diferencias. Por supuesto, hay que ocuparse de las modalidades de la aplicación de la solución de diferencias a la legislación sobre competencia, especialmente para adaptar la solución de diferencias a la especificidad de la legislación y la política de competencia.

## 6. Acuerdos de cooperación

17. Las disposiciones sobre la no discriminación no se aplicarían a los acuerdos de cooperación vigentes o futuros en materia de competencia, incluidos los acuerdos de cooperación bilaterales y las disposiciones sobre consultas y cooperación que figuran en acuerdos bilaterales o regionales de libre comercio. Si no se impusiera esa limitación al principio fundamental de no discriminación podrían darse situaciones en las que uno o más Miembros de la OMC que no sean partes, por ejemplo, en un

---

<sup>4</sup> Del mismo modo, pese a la existencia de disposiciones relacionadas con la competencia en varios de los Acuerdos vigentes de la OMC, como el Acuerdo sobre los ADPIC y el AGCS (incluido el documento de referencia sobre telecomunicaciones básicas), todas ellas versan sobre un sector y/o una cuestión específicos.

acuerdo de cooperación bilateral intenten aprovecharse de las disposiciones de ese acuerdo invocando el trato NMF.<sup>5</sup> Como se ha debatido anteriormente en el Grupo de Trabajo, los acuerdos bilaterales de cooperación son el resultado de una relación dilatada y en continua evolución entre las autoridades encargadas de la competencia en lo que concierne a la aplicación y el cumplimiento de sus respectivos regímenes jurídicos de competencia. La extensión de las disposiciones de esos acuerdos a países que no son inicialmente partes en ellos no sólo frustraría el fundamento que sustenta esos acuerdos, es decir, la relación en evolución, sino que también podría imponer cargas considerables a los países en desarrollo desde el punto de vista administrativo y financiero. Teniendo esto en cuenta, la CE ha venido proponiendo modalidades flexibles de cooperación internacional, como se explica minuciosamente en comunicaciones anteriores, sobre todo en el documento WT/WGTCP/W/184.

## **7. Acceso a los mercados**

18. La no discriminación -en relación con un acuerdo sobre la competencia- no influye en la cuestión de si las empresas extranjeras tienen acceso a un determinado mercado. Eso depende de diversos factores comerciales y de inversión que están fuera del alcance y el ámbito de un acuerdo de la OMC sobre la competencia. En otras palabras, al hacer más eficiente y más transparente el funcionamiento del mercado interno, una política interna eficaz en materia de competencia permite a los comerciantes e inversionistas beneficiarse plenamente de las concesiones de acceso a los mercados que el país importador o receptor pueda haber realizado ya, pero no supone mayores concesiones de acceso a los mercados. De hecho, la aplicación eficaz de la política de competencia en realidad ayuda a los países importadores o receptores a evitar algunos de los peligros observados que en ocasiones se relacionan con las concesiones de acceso a los mercados o la inversión extranjera directa, es decir, que las empresas o los inversionistas extranjeros con un poder de mercado desproporcionado en comparación con el de las empresas nacionales abusen de ese poder.

## **8. Transparencia**

19. La transparencia es un principio fundamental tanto para el sistema multilateral de comercio como para las autoridades encargadas de la competencia que aspiran a desarrollar y establecer una "cultura de competencia". Además de este importante objetivo, la transparencia de los regímenes jurídicos de competencia tiene gran importancia para las empresas que participan en el comercio internacional y para los consumidores. Por otra parte, la transparencia en lo que concierne a las medidas "una vez pasada la frontera", como la legislación y la política de competencia, es un medio importante para lograr un equilibrio entre, por una parte, el establecimiento de un sistema comercial previsible basado en normas y, por otra, garantizar que el alcance y el campo de aplicación de las disciplinas de la OMC no supongan una intromisión innecesaria.

20. Al mismo tiempo, hay que reconocer que algunos aspectos de la transparencia, incluida la disponibilidad pública de las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general, pueden entrañar costos administrativos y por consiguiente tendrían algunas repercusiones en la creación de capacidad. No obstante, también hay que tomar nota de que autoridades encargadas de la competencia creadas recientemente han señalado con frecuencia que la elaboración de procedimientos transparentes es un requisito esencial para asegurar la observancia de la ley y dar credibilidad en cuanto a su aplicación. Esto sugeriría que el acuerdo multilateral debería basarse en normas de transparencia suficientemente

---

<sup>5</sup> Con la limitación propuesta del principio de no discriminación la situación resultante sería esencialmente la que prevalecería en virtud de las reglas usuales del derecho internacional público, véanse el artículo 34 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según el cual: "Un tratado no crea derechos ni obligaciones para un tercer Estado sin su consentimiento", y el párrafo 1 del artículo 36 según el cual: "Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca, o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa."

exigentes, reconociendo al mismo tiempo que tal vez haya que introducir progresivamente algunos elementos y considerarlos prioritarios para los programas de asistencia técnica.

21. En la mayoría de los Acuerdos de la OMC se incluyen disposiciones concretas sobre la transparencia. Esas disposiciones están específicamente adaptadas al tipo de medidas gubernamentales abarcadas por el acuerdo. La transparencia ya está firmemente incorporada en Acuerdos de la OMC como el GATT (el artículo X relativo a la publicación y aplicación de los reglamentos comerciales), el AGCS (el artículo III relativo a la transparencia) y el Acuerdo sobre los ADPIC (el artículo 63 relativo a la transparencia).

22. En la esfera de la competencia, el compromiso de transparencia se aplicaría evidentemente a todas las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general. Los Miembros de la OMC estarían obligados a garantizar la disponibilidad pública de todas las leyes, reglamentos y directrices de aplicación general de una manera completa y puntual, ya sea en forma impresa o mediante un sitio en la Web al que pueda acceder el público.<sup>6</sup>

23. La segunda parte de la obligación de transparencia sería una prescripción de notificación para los Miembros de la OMC en lo que concierne a sus leyes, reglamentos y directrices de aplicación general. El órgano lógico al que se haría esa notificación sería el previsto Comité de Política de Competencia de la OMC. A este Comité también podría encargársele la tarea de velar por la coherencia y mayor eficacia de las actividades de asistencia técnica y creación de capacidad sirviendo de foro para todos los donantes y beneficiarios, del mismo modo que la legislación de los Miembros de la OMC podría ser examinada voluntariamente por homólogos con la intervención de este Comité o incluso examinarla él mismo. Para facilitar tanto la concepción de programas plurianuales en el ámbito de la asistencia técnica y la creación de capacidad como los exámenes voluntarios realizados por homólogos, la notificación a este Comité de las leyes, reglamentos y directrices vigentes de aplicación general facilitaría enormemente el desempeño eficiente de esas funciones.

## **9. Exclusiones y exenciones sectoriales**

24. La cuestión de las exclusiones y exenciones sectoriales del alcance y aplicación de la legislación sobre la competencia tiene mucha importancia desde el punto de vista de la competencia y el comercio. Al mismo tiempo, hay que reconocer que es una cuestión muy delicada y compleja entre los países en desarrollo y algunos miembros de la OCDE, incluida la CE. Algunos países han manifestado que, para obtener consenso en la introducción de legislación sobre la competencia, ha sido necesario introducir algunas exclusiones y exenciones sectoriales, pero que éstas se han limitado posteriormente a lo largo del tiempo. Al analizar la evolución reciente, la tendencia ha sido claramente eliminar esas exclusiones o definirlas de manera cada vez más restringida. Sugerimos que un planteamiento flexible sería centrarse en esta etapa en la cuestión esencial de la transparencia y su aplicación a las exclusiones y exenciones sectoriales, así como su examen en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo también podría examinar de manera provechosa la experiencia de los Miembros de la OMC que han eliminado gradualmente exenciones y exclusiones (incluidas las razones y el calendario de dicha eliminación gradual), así como los procedimientos internos utilizados para promulgar esas exenciones y exclusiones.

---

<sup>6</sup> En cuanto la obligación de facilitar información de manera completa y puntual, véanse *Japón - Comercio de semiconductores*, IBDD 35S/130, L/6309, adoptado el 4 de mayo de 1998, y *Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la importación de determinados productos avícolas*, WT/DS69/AB/R.

## 10. Equidad procesal

25. Como sucede en otros Acuerdos de la OMC<sup>7</sup>, las disposiciones relacionadas con los principios fundamentales también deberían tratar la cuestión de la "equidad procesal" y, dentro de esta rúbrica, la disponibilidad de recursos nacionales eficaces y adecuados. Entre ellos se incluirían determinadas garantías procesales con arreglo a las cuales los particulares tengan acceso a las autoridades encargadas de la competencia, garantías durante las investigaciones y la aplicación en materia de competencia, el derecho de apelar contra las decisiones administrativas y la función del poder judicial en el proceso de aplicación.

26. Las garantías procesales que quedarían comprendidas lógicamente en esta rúbrica se refieren principalmente a los llamados "derechos de defensa" que deben respetar las autoridades encargadas de la competencia en todos los procedimientos en que puedan imponerse sanciones. Entre los "derechos de defensa" a favor de empresas que intervengan en procedimientos administrativos ante las autoridades encargadas de la competencia podrían incluirse, por ejemplo, los siguientes:

- i) el derecho de las partes en un procedimiento sustanciado con arreglo a la legislación interna sobre la competencia a tener acceso al organismo o tribunal que aplica la ley y a ser informado de las objeciones que opone la autoridad a su conducta;
- ii) el derecho de esas partes a exponer sus opiniones en un procedimiento justo y equitativo antes de que se emita una decisión negativa en contra suya;
- iii) el derecho a ser informado de una decisión definitiva motivada que especifique las razones en que se basa;
- iv) el derecho a apelar contra las decisiones administrativas de las autoridades encargadas de la competencia y a que dichas decisiones sean revisadas por un órgano judicial.

27. Otra cuestión que puede incluirse en el principio fundamental de la equidad procesal sería la de la protección de la información confidencial, incluidos los secretos comerciales. Como se ha señalado ya en comunicaciones anteriores de la CE y sus Estados miembros, la necesidad de proteger la información confidencial -y la expectativa legítima de las empresas que han facilitado esa información de que se preste protección adecuada- entraña limitaciones jurídicas y prácticas en cuanto a la información que se puede intercambiar. El acuerdo de la OMC tendría que establecer algunas normas básicas para la protección de esa información.

28. Lo que es importante para la autoridad encargada de la competencia es brindar protección adecuada de los secretos comerciales y demás información confidencial que facilitan las empresas, las personas físicas y las autoridades públicas que intervienen o cooperan en procedimientos sustanciados con arreglo a normas internas de competencia. El hecho de no brindar una protección adecuada menoscabaría gravemente la eficacia y credibilidad del régimen de competencia, podría inducir a las empresas de esa jurisdicción a mostrarse reacias a facilitarle la información que necesita para llevar a cabo sus tareas e incluso podría exponer a la autoridad encargada de la competencia -en algunos sistemas jurídicos- a reclamaciones por daños y perjuicios.

---

<sup>7</sup> Los Acuerdos de la OMC que contienen disposiciones relativas a la equidad procesal incluyen el párrafo 3 a) - b) del artículo X del GATT relativo a la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas "de manera uniforme, imparcial y razonable", así como el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a procedimientos administrativos "justos y equitativos", y el artículo 42 del mismo Acuerdo relativo a los procedimientos y recursos civiles y administrativos.